

C.A. de Santiago

Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Que comparece el abogado don Eugenio Labarca Birke, en representación de Banco Santander Chile, quien deduce reclamo de ilegalidad en el marco del artículo 28 de la Ley N° 20.285, en contra de la decisión adoptada el 10 de septiembre de 2019, bajo el Rol C5468-18, por el Consejo para la Transparencia, en aquella parte en que, acogiendo parcialmente el amparo deducido por don Luis Río Cabello, dispuso en el acuerdo II. a) i., requerir al señor Fiscal Nacional Económico, hacer entrega al solicitante de una copia de las razones ofrecidas por los Bancos a la esa institución para negar el acceso a cuentas bancarias a las casas de cambio y, las condiciones informadas por los Bancos para que las casas de cambio puedan abrir cuentas corrientes, las que la Fiscalía Nacional Económica dio por suficientes.

Los fundamentos de la impugnación que provoca consisten, en primer término, en la ilegalidad en que incurriría la decisión al no denegar el amparo, pues, a su juicio, concurre al respecto la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia y, en segundo y tercer lugar, por verificarse además en la especie, las causales de secreto o reserva de los numerales 2° y 5° de la norma legal antes citada, respectivamente.

Sobre los antecedentes que originan el presente reclamo, explica que el 20 de septiembre de 2018, don Luis Río Cabello presentó ante la Fiscalía Nacional Económica, una solicitud de entrega de información, conforme al artículo 24 de la Ley de Transparencia, por la cual pidió acceso a la investigación llevada adelante por dicho organismo, bajo el expediente Rol 2.355-15 FNE, archivado desde junio de 2017, y que versaba sobre la negativa de los Bancos a la apertura de cuentas corrientes a las casas de cambio, indagatoria que se originó por denuncia de un particular por eventuales infracciones a la libre competencia en dicho mercado, en la que se decretó la confidencialidad de la información recabada, en particular, respecto de los ajustes a la política interna de Banco Santander que fueron acompañados con ese carácter por tratarse de información comercial estratégica cuya revelación podría afectar significativamente su



desenvolvimiento competitivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 letra a) del Decreto Ley N° 211.

Añade que la Fiscalía Nacional Económica, ajustándose a derecho, resolvió la solicitud de acceso a la información haciendo entrega sólo de aquellas piezas del expediente de investigación que no tuvieran el carácter de confidencial, lo que fue materia del amparo en que incide este proceso, en cuya tramitación dicha autoridad evacuó descargos, al igual que el Banco Santander, manifestando luego en la audiencia pública de rigor, su oposición a la entrega de la información confidencial fundado en las causales de secreto del artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, no obstante lo cual, el Consejo para la Transparencia resolvió acoger el amparo en lo relativo a dar a conocer las razones ofrecidas por los Bancos para negar el acceso a cuentas bancarias a las casas de cambio y las condiciones informadas para que las casas de cambio pudieran abrir cuentas corrientes.

Sobre el primer cuestionamiento de ilegalidad, afirma que el Consejo descarta la aplicación de la causal de reserva vinculada a la afectación de la función de la Fiscalía Nacional Económica, debido a sus facultades para obtener información, lo que cuestiona, ya que tal postura, implica desconocer los objetivos del artículo 39 letra a) del Decreto Ley N° 211 plasmados en la historia de la Ley 20.361, que le dan el carácter de esencial a la confidencialidad de la información para las labores del aludido órgano fiscalizador, teniendo la prerrogativa de disponerla sin importar si las investigaciones se encuentran formalizadas o no, de manera que los particulares cuentan con la confianza de que no se verán afectados en términos de competencia al colaborar con tales indagaciones, lo que ha sido reconocido reiteradamente por la reclamada en decisiones de amparo anteriores, sin que se expliquen ahora las razones que justifican el cambio de criterio.

Por otro lado, manifiesta que la decisión reclamada, ni siquiera analiza el derecho contenido en el inciso segundo del artículo 39 letra h) del aludido Decreto Ley, en cuando la facultad de su parte de oponerse a la entrega de información, en la medida que aquella sea fundada o justificada, lo que ha ocurrido en la especie.

Finalmente, sobre este punto, arguye que las facultades coercitivas del órgano fiscalizador para requerir información bajo ningún supuesto



alcanzan para obligar a que los particulares ofrezcan condiciones o arriben a un acuerdo con él, sino que, en la especie, su entrega es producto de un acuerdo voluntario entre las partes que, en específico, respecto las condiciones ofrecidas por los Bancos para que las casas de cambio puedan abrir cuentas corrientes, la Fiscalía Nacional Económica las dio por suficientes, y fueron entregadas bajo el compromiso de que no serían divulgadas, en cuyo mérito se archivó la investigación.

Por otro lado, en lo tocante a la infracción al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, afirma que la divulgación de la información solicitada afectará los derechos comerciales de Banco Santander, y de otros Bancos, toda vez que tendrá un efecto negativo sobre su desempeño competitivo, ya que, de publicarse las condiciones ofrecidas por todas las instituciones financieras, los Bancos podrían modificar sus propios requisitos y ajustarlos de acuerdo con aquellas que resulten más complejas de cumplir por parte de las casas de cambio, dificultando, por un lado, el acceso a dichas entidades a abrir cuentas corrientes y, por otro, permitiendo que los competidores de Banco Santander puedan conocer las condiciones que éste ofrece a sus clientes que operan casas de cambio, lo que no varía si un agente económico ha decidido libremente publicar sus condiciones de conformidad con sus propias políticas internas de riesgo. En tal sentido, indica que decisión de amparo atacada, no analiza el contexto y el tratamiento que el Decreto Ley N° 211 le da a la información comercial sensible de los particulares que toman parte en una investigación y, por eso, llega a conclusiones contrarias al sistema de libre competencia y que no guardan relación con los objetivos de la Ley de Transparencia.

Finalmente, en lo que atañe a la contravención de lo decidido con la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, sostiene que la reclamada ignora todo análisis respecto al origen y naturaleza de la facultad otorgada por una ley de quórum calificado al Fiscal Nacional Económico, por establecer reserva o secreto respecto de procedimientos empleados por un órgano del Estado, lo que se relaciona con el ejercicio de una regla de carácter constitucional prevista en el artículo 8° de la Carta Fundamental, en tanto que el principio de transparencia y publicidad del artículo 5° de la Ley de Transparencia, que es de rango meramente legal, que si bien replica la voluntad del constituyente de que los actos de los



órganos del Estado sean públicos, no toma en cuenta que la excepción sólo podrá materializarse por intermedio de una ley de quórum calificado, lo que ocurre en la especie con el artículo 39 letra a) del Decreto Ley N° 211 tantas veces citado.

Por todo lo expuesto, pide acoger el reclamo intentado, dejando sin efecto el acuerdo II. a). i. contenido en ella.

Segundo: Que informó el Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del reclamo incoado, por estimar que la decisión impugnada se ajusta a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública, sin que se haya incurrido en ninguna de las ilegalidades que se denuncian.

En primer término, da cuenta de la substanciación del amparo ante su autoridad, de acuerdo con lo reseñado en motivo anterior, poniendo especial énfasis que luego de que la Fiscalía Nacional Económica evacuara y complementara sus descargos, se confirió traslado a los terceros involucrados Western Union Chile Limitada, Banco Estado, Banco Estado Corredores de Bolsa, Scotiabank Chile y Scotia Azul Corredores de Bolsa Limitada, Chilexpress S.A., Argenper Envíos de Dinero SpA, Banco de Chile, Banco do Brasil S.A., BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. y Euroamérica Corredores de Bolsa S.A, al igual que la reclamante Banco Santander, quien en su caso, se opuso a la entrega de lo requerido, invocando entre sus argumentos la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, para luego de realizarse la respectiva audiencia pública, adoptar la decisión cuestionada, por la que se acordó *“II. Requerir al Sr. Fiscal Nacional Económico: a) Hacer entrega al solicitante de una copia de la siguiente información: i. Las razones ofrecidas por los bancos a la FNE para negar el acceso a cuentas bancarias a las casas de cambio; y, las condiciones informadas por los bancos para que las casas de cambio puedan abrir cuentas corrientes, las que la FNE dio por suficientes” y “ii. Entregar los antecedentes acompañados por Euroamérica Corredores de Bolsa S.A., al expediente Rol 2355-15, debiendo tarjar todos los datos personales de contexto”, además de: “III. Rechazar el amparo en lo que atañe a las políticas sobre lavado de activos de los bancos que puedan estar presentes en las razones que informaron a la FNE; y la alegación referente a*



que lo entregado por el órgano en su mayoría estaría en blanco y sin contenido, por las consideraciones expuestas precedentemente”.

En cuanto al fondo, después de reseñar el objeto de la controversia resumiendo los extremos del reclamo intentado, alega como primer asunto, que Banco Santander Chile carece de legitimación activa para reclamar de ilegalidad acudiendo a la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, ya que su supuesto básico de procedencia, implica la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, cuya ponderación e invocación sólo puede corresponder al ente de la Administración solicitado de información, en este la Fiscalía Nacional Económica, y no un tercero como en el caso de marras, por no estar establecida en su beneficio, ni para su resguardo, no pudiendo erigirse en una especie de agente oficioso de la institución reclamada, destacando que aquella no dedujo reproche de ilegalidad ante esta Corte, renunciando a la invocación de tal causal de reserva para posibilitar entrega de la información incoada.

No obstante lo anterior, sostiene que la entrega de la información específica que dispone la decisión reclamada no afecta el debido cumplimiento de las funciones de la Fiscalía Nacional Económica, por lo que no resulta reservada en virtud de lo dispuesto en el ya citado artículo 21 N° 1, ya que el carácter voluntario de la entrega de información por parte de los actores de mercado en una investigación formalizada se desvirtúa atendida las facultades compulsivas que al efecto detenta el órgano fiscalizador, consagradas en los artículos 39 con relación al 42 del Decreto Ley N° 211 y el análisis de costos beneficios que realizan los fiscalizados ante la eventual imposición de sanciones, haciendo presente además que la información materia de las decisiones de amparo que cita el Banco Santander, no es idéntica a aquella cuya entrega se dispuso en la especie, pues con lo acordado no se está dando acceso al expediente completo de investigación ni tampoco a antecedentes comerciales sensibles de los investigados.

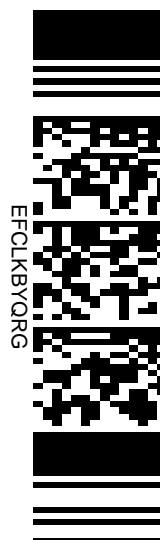
En segundo lugar, asevera que la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución y las disposiciones pertinentes de la Ley de Transparencia, pues obra en poder de la Fiscalía Nacional Económica en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y formaron parte de procedimientos y actos



administrativos, que además gozan de presunción legal de publicidad sin importar su origen, de forma tal que los antecedentes que se ha ordenado entregar, constituyen el fundamento del acto administrativo que puso término a la investigación y decidió archivarla en virtud del acuerdo arribado con los Bancos para aperturar cuentas corrientes a las casas de cambio, por lo que su publicidad se ajusta precisamente al mandato constitucional reseñado.

Como tercer aspecto, refiere que la información que se ha dispuesto entregar no afecta los derechos económicos ni comerciales de Banco Santander Chile, por lo que no se configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, ya que no se dio acceso a la investigación actualmente archivada que fue llevada adelante por la Fiscalía Nacional Económica, sino que sólo las razones informadas por los Bancos para negar el acceso a las cuentas bancarias a las casas de cambio y las condiciones propuestas para que las éstas puedan abrir cuentas corrientes, subrayando que Euroamérica, al evacuar el pertinente traslado conferido, accedió a la entrega de la información aportada por ella al expediente de investigación, lo mismo respecto de Banco de Chile que señaló que tales condiciones son de público conocimiento pues están disponibles para su consulta por cualquier persona en su página web.

Finalmente, pide se deseche lo reclamado en aquella parte en que se funda en la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, toda vez que, durante el procedimiento de amparo, Banco Santander no invocó en la oposición impetrada, reserva alguna basada en lo dispuesto en el inciso tercero de la letra a) del artículo 39 del Decreto Ley N° 211, por lo que no puede introducir nuevos argumentos con posterioridad a la adopción de la decisión cuestionada, lo que implicaría infringir el principio congruencia procesal, por no haberse pronunciado sobre dicho punto lo resuelto. No obstante, asegura que tampoco se verifica dicha causal de reserva o secreto, pues el mentado precepto del Decreto Ley citado, faculta al Fiscal Nacional Económico a disponer la reserva siempre que se cumplan con las hipótesis que allí se contienen, lo que no ocurre respecto del Banco reclamante, pues guarda relación con la identidad del denunciante ni del delator que aporte antecedentes que conduzcan a la acreditación de la conducta de colusión y a la determinación de los responsables, ni tampoco se ha ordenado entregar formulas, estrategias o secretos comerciales ni



información que afecte el desarrollo del giro de Banco en condiciones competitivas, ni ningún antecedente que ponga en riesgo la eficacia de la investigación de la Fiscalía, la que además se encuentra archivada.

Por los argumentos expresados, pide se rechace el reclamo de ilegalidad planteado.

Tercero: Que el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, dispone que *“Son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”*

Cuarto: Que, de lo preceptuado en la Carta Fundamental, se deduce que la publicidad es un principio constitucional, de orden general que rige los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Dicho principio se recoge en las normas de la Ley 20.285, que consagró el derecho fundamental del acceso a la información en el interés de avanzar hacia una mayor transparencia en la gestión de la Administración del Estado y de la rendición de cuentas de la función pública que regula. Por ello, en su artículo 1° se plasmó el principio de la transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. En este entendido se desprende que la regla general es que la información generada, distribuida, recibida, gestionada y almacenada en y por la administración pública, es también pública y sólo en ciertos casos, que constituyen la excepción, la información puede revestir el carácter de reservada y/o secreta. El correlato de este principio se encuentra en el artículo 10 del referido texto legal, que consagra el derecho a toda persona de solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.

Entonces, de acuerdo con el principio de transparencia y publicidad, procede por norma general la entrega de la información, salvo que, efectivamente, la requerida se encuentre comprendida dentro de las



situaciones de excepción a este principio. En este último caso, corresponde a quien lo alega, acreditar las causales de reserva y la misión del Consejo para la Transparencia, la de resolver el fondo de las peticiones, mediante la respectiva decisión de amparo.

Quinto: Que, ahora bien, el reclamo en contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia no es un recurso de alzada, ni de fondo, sino que una reclamación por decisiones ilegales que el referido organismo cometa en la dictación de sus decisiones de amparo, motivo por lo cual el rol de este tribunal es verificar la existencia de las supuestas infracciones normativas que se esgrimen en contra de aquellas.

Sexto: Que, establecido el marco constitucional y legal aplicable en la especie, se hace necesario precisar lo esencial de los cuestionamientos planteados por la reclamante de autos, que conforme a lo ya explicitado en los motivos precedentes, se circunscribió a censurar la decisión de amparo Rol C5468-18, adoptada por el Consejo para la Transparencia el 10 de septiembre de 2019, que acogió parcialmente el amparo de acceso a la información pública deducido por don Luis Río Cabello en contra de la Fiscalía Nacional Económica, disponiendo en lo pertinente: *“II. Requerir al Sr. Fiscal Nacional Económico: a) Hacer entrega al solicitante de una copia de la siguiente información: 9 i. Las razones ofrecidas por los bancos a la FNE para negar el acceso a cuentas bancarias a las casas de cambio; y, las condiciones informadas por los bancos para que las casas de cambio puedan abrir cuentas corrientes, las que la FNE dio por suficientes. (...)”*.

Séptimo: Que, en lo concerniente al fondo del asunto debatido, éste se centra en determinar si la reclamada obró o no conforme a derecho al acoger parcialmente el amparo deducido, disponiendo la entrega de los antecedentes aludidos y desestimando la concurrencia de las causales de reserva invocadas, esto es, las del artículo 21 N° 1, 2 y 5 de la Ley de Transparencia en relación con artículo 39 letra a) del Decreto Ley N° 211.

Octavo: Que, como se adelantó, la primera causal de reserva en que se sustenta el reclamo de ilegalidad, se funda en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, que permite denegar total o parcialmente el acceso a la información: *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido”*.



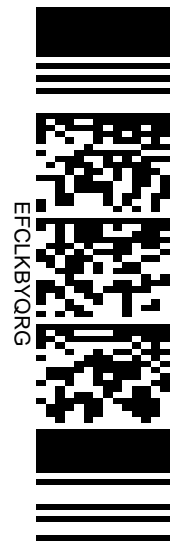
Sobre este punto el Consejo para la Transparencia ha alegado la falta de legitimación activa del reclamante, dada su naturaleza de tercero involucrado, atendida que dicha causal obra sólo en favor de la autoridad requerida de informar, y cuando tal requerimiento afecte el cumplimiento de sus funciones.

De lo dicho, cabe analizar si la recurrente está legitimada para accionar de ilegalidad, y sólo después de superado aquello, entrar a determinar si la información requerida es pública o reservada.

Noveno: Que, en efecto, el Banco Santander Chile, quien ha deducido el libelo de reclamación, es un tercero que se siente afectado por la decisión de proporcionar información al requirente de amparo ante el Consejo para la Transparencia, quien carece de legitimación para accionar invocando la causal antes indicada, cuyo supuesto básico consiste en la afectación del debido cumplimiento de las funciones del ente requerido, cuya ponderación e invocación sólo corresponde al órgano de la Administración solicitado, por cuanto guarda relación con la observancia de sus propias funciones y sólo a él corresponde valorar su afectación con ocasión de la publicidad de la información pedida, de manera que no resulta aceptable que este tercero potencialmente afectado, se subrogue al órgano requerido en dicha labor, por lo que en aquel extremo en que el reclamo se asila en la causal de secreto antes expresada, el arbitrio intentado necesariamente debe ser desestimado.

Décimo: Que, en segundo lugar, el Banco Santander Chile ataca la decisión de amparo de marras, afirmando que aquella ordena entregar información protegida por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, provocando un efecto negativo sobre su desempeño competitivo, ya que, de publicarse las condiciones ofrecidas por las instituciones financieras, los Bancos podrían modificar sus propios requisitos y ajustarlos de acuerdo con aquellas que resulten más complejas de cumplir por parte de las casas de cambio, y por otro lado, se permitiría que los competidores de Banco Santander puedan conocer las condiciones que éste ofrece a sus clientes que operan casas de cambio.

Undécimo: Que, tal y como consta de los antecedentes allegados al proceso y de los considerandos de la decisión reclamada, no es posible para esta Corte afirmar que las razones informadas por los Bancos a la Fiscalía

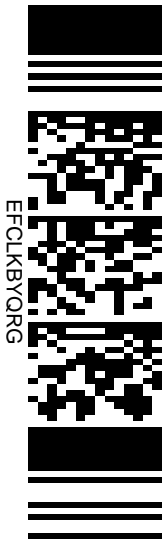


Nacional Económica para negar acceso a las cuentas corrientes a las casas de cambio, como asimismo a las condiciones propuestas por tales entidades mercantiles para que aquellas puedan abrir cuentas corrientes, en caso de ser divulgadas, ocasionen perjuicios para el Banco Santander Chile.

Sobre este punto, no basta la creencia de que concurre en la especie la causal normativa de secreto para estimarla *per se* y decretar, por tanto, la imposibilidad de acceder a la información a la que se pretende tener conocimiento, puesto que ella no queda enteramente sujeta a la subjetividad de la interesada y de estimar, como se pretende en este caso, que lo informado al ente fiscalizador de libre competencia, sí contiene derechos que merecen ser resguardados a través del mantenimiento de su secreto, debe ser objeto de un escrutinio estricto a fin de determinar fehacientemente su concurrencia, función que fue cumplida por el Consejo para la Transparencia, debiendo demostrarse por la actora que la divulgación cuestionada genera o podrá generar un daño específico a un valor jurídicamente protegido, relativo su interés comercial o económico, debiendo ser desestimada la alegación que propugna la reserva si nada de aquello que nominalmente se sostiene se plasma en lo que se pretende publicitar, requiriéndose prueba por quien aspira a hacer excepción a la regla que tiende a la mayor publicidad posible acerca del daño sustancial alegado, nada de lo cual fue acreditado en los autos, máxime, cuando obra en los antecedentes, que en sede administrativa de descargos, la empresa Euroamérica accedió a la entrega de la información y el Banco de Chile afirmó su publicidad a través del libre acceso por medio de su página web.

Duodécimo: Que, así las cosas, no existiendo antecedentes que permitan a estos jueces estimar que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información requerida, afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, tampoco es posible tener por configurada la segunda causal de reserva invocada por la parte reclamante.

Décimo Tercero: Que, finalmente el Banco Santander invocó la causal de secreto consagrada en el número 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación con el deber de reserva expresado en el artículo 39 letra a) del Decreto Ley N° 211.



Décimo Cuarto: Que, de acuerdo a la lectura del libelo fundante de la acción de reclamación, se indica con relación a esta última causal a la que se acude, que la decisión impugnada, infringiría el literal a) del mentado artículo 39, en cuya virtud, el Fiscal Nacional Económico puede decretar la reserva o confidencialidad de los antecedentes recabados en la investigación, alegación que el Banco Santander no esgrimió durante el procedimiento de acceso a la información pública llevado a cabo ante el Consejo para la Transparencia, sino que, sólo se ha invocado en esta sede jurisdiccional.

Lo anterior, se evidencia de lo consignado en el literal h) del punto 6) de la decisión reclamada, en que consta que: *“h) Banco Santander: Se opone a la entrega de lo requerido por cuanto no es información pública, sino privada del banco, la cual se envió a la FNE con carácter de confidencial, en virtud del artículo 39 letra a), del dl 211, pudiendo su entrega revestir los caracteres de un ilícito de libre competencia. Por otra parte, aun cuando se entendiera como fundamento de un acto, no es posible su entrega por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, debido a que se trata de condiciones comerciales para contratar la apertura de cuentas corrientes con casas de cambio, las cuales son condiciones contractuales entre privados, constituyendo parte de la política comercial interna del banco, las cuales son confidenciales, justamente, para evitar que un banco pueda conocer las medidas que el resto ofreció, resguardando la adecuada competencia. Se afectaría también el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en tanto lo pedido no habría sido acompañado al proceso o lo habría sido de otra forma si Santander no hubiera tenido la legítima expectativa que dichos antecedentes se encontrasen protegidos por la confidencialidad legalmente establecida para la investigación”.*

Décimo Quinto: Que, de lo dicho queda de manifiesto que, al tiempo en que el Consejo para la Transparencia resolvió el amparo por denegación de acceso a la información, lo hizo atendiendo al tenor de la infracción denunciada por el solicitante, bajo el marco normativo aplicable, en el que no se abordó la última causal de reserva expuesta en este arbitrio.

En consecuencia, no resulta factible que el reclamante alegue *ex post*, que lo decidido implica una vulneración al artículo 39 letra a) del Decreto Ley N° 211, por cuanto a su respecto ha operado el principio de la preclusión



procesal, dado que dichas alegaciones debieron hacerse en su oportunidad ante el Consejo para la Transparencia, generándose como consecuencia la pérdida o posibilidad de hacerlo con posterioridad, más aún si se tiene presente la naturaleza de la acción deducida, la que constituye un mecanismo de control de la actividad de los órganos de la Administración, que el legislador provee para la tutela de los derechos e intereses legítimos de quienes se sientan afectados por decisiones adoptadas fuera de la normativa que les rige y que les circunscribe a un ámbito determinado de competencia, de lo cual deviene como exigencia para quien reclama, el señalamiento de la norma que el recurrido ha vulnerado y el modo en que se produciría la infracción que se aduce, todo ello en base a la controversia y argumentos planteados en su oportunidad y que la reclamada pudo tener en consideración para decidir según se ha expresado.

Décimo Sexto: Que, asimismo, una decisión en contrario conllevaría una transgresión al principio de congruencia procesal, que orienta todo procedimiento judicial y administrativo, por cuanto en el evento que determinadas alegaciones de reserva no hubieren sido realizadas en la oposición o en los correspondientes descargos efectuados ante el Consejo para la Transparencia, no puede pretenderse que esta Corte efectúe un pronunciamiento de legalidad de la actuación de esta última, respecto de antecedentes y fundamentos que no fueron materia de discusión en la instancia en que debió hacerlo y, en consecuencia, de la decisión de amparo que en esta sede se revisa.

De esta forma, el análisis que se efectúa a través de la interposición del presente reclamo de ilegalidad, dice relación con la confrontación de la decisión del Consejo para la Transparencia con la normativa que rige sus actos, lo que no puede ocurrir o plasmarse, si los argumentos hechos valer por el recurrente en la instancia administrativa mutan y se apartan de aquéllos que fueron objeto de la discusión, no pudiendo en consecuencia, atribuírsele al recurrido la comisión de alguna ilegalidad al respecto.

Décimo Séptimo: Que, a mayor abundamiento, el razonamiento anterior ha sido recogido por la Excelentísima Corte Suprema, mediante sentencias pronunciadas en los autos Roles N° 18.728-2018 y N° 18.730-2018, de 3 de enero de 2019, en las que razonó en su motivo décimo que: *“(...) basta para descartar la concurrencia de falta o abuso en el actuar de*



los recurridos el verificar que la excepción en análisis no fue invocada por los quejosos ante el Consejo Para la Transparencia, omisión que impedía a la Corte de Apelaciones de Santiago tenerla por configurada en sede de reclamación, pues aquel estadio jurisdiccional -como claramente lo indica el artículo 28 de la Ley N° 20.285- se limita al examen de legalidad del obrar del Consejo actuando como ente decisor del recurso de amparo interpuesto por el solicitante de la información denegada, legalidad que, por consiguiente, no pudo verse infringida si la configuración de la causal de secreto o reserva no fue sometida a su conocimiento”.

Décimo Octavo: Que, de esta forma, corresponde concluir que la decisión de amparo Rol C5468-18 emitida por el Consejo para la Transparencia, se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le fueron establecidas, conforme lo previenen el artículo 8 de nuestra Carta Fundamental y los artículos 5, 10, 13, 24, 28 y 33 de la Ley de Transparencia, no configurándose, en consecuencia, ilegalidad alguna en su adopción.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley N° 20.285, **se rechaza** el reclamo de ilegalidad interpuesto en representación del Banco Santander Chile en contra de la decisión de amparo Rol N° C5468-18 adoptada por el Consejo para la Transparencia con fecha 10 de septiembre de 2019, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

N° Contencioso Administrativo-566-2019.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro Crisosto G., Antonio Ulloa M. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

